

Renovación Moral

Todos Hijos o Todos Entenados

POR LORENZO MEYER

LA administración presidida por Miguel de la Madrid inició sus actividades en un clima de depresión económica, política y moral sin paralelo en la historia reciente de México. Por ello no perdió tiempo en marcar su distancia frente a la administración saliente, que le entregaba una economía en ruinas y una sociedad civil que en todos sus niveles daba muestras de irritación y de desconfianza hacia las autoridades. Tan violento fue el rechazo de los recién llegados respecto de quienes les precedieron que más parecían ser opositores del lopezportillismo que criaturas de éste.

Las promesas del nuevo equipo fueron contundentes y solemnes: entre otras cosas se comprometieron a poner fin a la economía de ficción por demagógica e irresponsable. Por doloroso que fuera para el nivel de vida popular, las tarifas de los servicios y bienes producidos por el Estado habrían de subir sistemática y periódicamente. Y la terrible promesa se ha cumplido con una puntualidad y exactitud digna de los británicos: la gasolina, la electricidad, el transporte, etc., aumentan a un ritmo que, de seguir así, la inflación de 1983 llegará a ser tan grande como la del último año de gobierno de José López Portillo.



SIN embargo, junto a las medidas de austeridad —y para compensarlas— se prometió a los mexicanos una “renovación moral” desde el poder. Era el medio para hacer tragar al paciente la amarga medicina económica. En su momento, esta renovación moral fue entendida, en parte, como un ajuste de cuentas con los corruptos e irresponsables que en el sexenio anterior habían llevado al país a la bancarrota. El castigo ejemplar, la personalización de la culpa y la responsabilidad podría ayudar a mantener algo de la legitimidad que aún quedaba a nuestras estructuras políticas y sociales.

Corrió el tiempo y la nueva administración se asentó. Se iniciaron entonces algunas averiguaciones en torno a posibles actos notables de corrupción, entre los que destacaron los de un ex gobernador —Armando León Bejarano— y los de ciertos altos directivos de Pemex —Ignacio de León y Jesús Chavarría—; pero se evitó llegar a lo más alto.

SIGUE EN LA PAGINA NUEVE

Renovación Moral

Sigue de la página seis

Peor aún, los inculpados —a los que de hecho se había puesto sobre aviso por medio de las múltiples declaraciones públicas que sobre ellos se hicieron antes de proceder formalmente en su contra—, desaparecieron, dejando en ridículo a las autoridades responsables y a la renovación moral.



ACTO seguido, las miras de la renovación moral bajaron aún más de nivel, y entonces sí, con bombo y platillos se puso tras de las rejas a Lidia Camarena, ex diputada y ex directora administrativa de Propemex. El fraude de que se le acusa resultó insignificante comparado con los ocurridos

en Pemex o en el estado de Morelos, pero la señora Camarena tuvo la mala fortuna de haber chocado con la Secretaría de Programación y Presupuesto en el sexenio pasado. Así, mientras la Procuraduría General de la República exoneraba a José López Portillo de la acusación de peculado formulada en su contra por el PSD e Ignacio Burgoa —la PGR basó su resolución en el hecho de que el "riguroso control" (?) que el Poder Legislativo ejerció sobre el ex Presidente le impidió todo acto impropio—, todo el peso de la renovación moral cayó sobre uno de los disidentes secundarios de la gran "familia posre- cionaria".

Así, pues, y hasta el momento, el castigo largamente esperado a los "inmorales" del pasado parece ser muy selectivo; más ruido que nueces. El tibio cumplimiento de la promesa de la renovación moral contrasta con el rigor con que se cumplen las alzas de los precios. Es posible que esto se deba a que los nuevos gobernantes han encontrado una gran resistencia por parte de los antiguos poderosos y que, en aras de la preservación de la unidad de la "familia posrevolucionaria", se considere necesario tender un manto de olvido sobre la obvia inmoralidad del pasado inmediato. Sin embargo, esto conlleva un precio: perder legitimidad y credibilidad.

De ser cierto lo anterior, entonces a la política de renovación moral sólo le queda ahora una alternativa: echarla al olvido o aplicar el rigor de las leyes contra el peculado únicamente a quienes ya están advertidos, es decir, a los nuevos funcionarios. Únicamente así se puede salvar algo de la credibilidad perdida. En cualquier caso, lo peor sería crear más Lidias Camarena, es decir, echar las redes de la justicia únicamente sobre peces pequeños, porque éstos nadaron por las corrientes equivocadas de fines del sexenio. Eso no sería justo, ni mucho menos inteligente: todos hijos o todos entenados.